

Capítulo 2

Actores y coaliciones de poder en Villamontes y Entre Ríos: una lectura histórica y contemporánea

Guido Cortez

1. Introducción

El presente capítulo presenta una comparación de los procesos de ocupación territorial y conformación de grupos sociales en torno a los cuales se han estructurado las dinámicas territoriales en el ámbito rural de los municipios de Villamontes y Entre Ríos en el chaco tarijeño. Se destaca en el informe la influencia de las nuevas estructuras estatales y legislativas en las acciones y estrategias adoptadas por los actores sociales locales, en una coyuntura política nacional de profundas y varias reformas políticas y de disputas por la redistribución de la renta hidrocarbúfera.

La región donde hoy se ubican los municipios de Entre Ríos y Villamontes fue conocida en la época colonial como área de frontera. Hasta principios del siglo XVIII la zona estaba exclusivamente habitada por unas siete etnias indígenas, entre ellas: los guaraníes, conocidos entonces como chiriguano, los weenhayek llamados por los españoles matacos, los tapietes, los tobas, algunas familias tsirakuas²⁶, chorotes y chulupíes (hoy nivaklés).

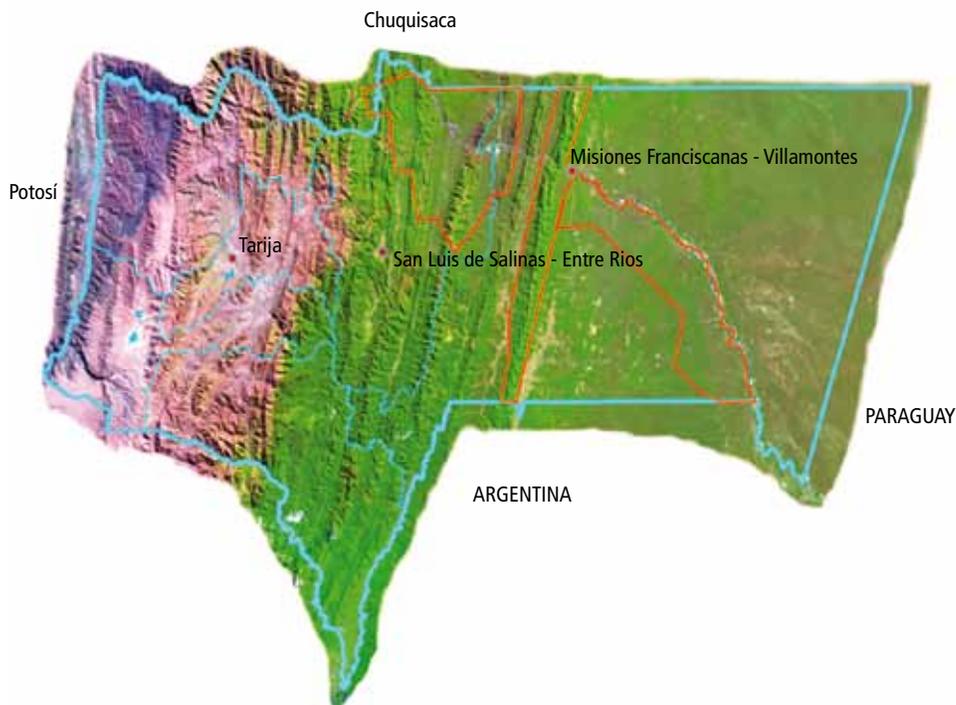
La penetración hacia el chaco tarijeño por parte de los colonizadores españoles se realizó a partir de la ciudad de Tarija, en dirección al este, con la fundación

26 Probablemente pertenecientes a la etnia ayorea.

de la población de San Luis de las Salinas en la actual provincia O'Connor, lo que influyó en el alejamiento de la población guaraní hacia el noreste de esta provincia.

En el siguiente mapa del departamento de Tarija se puede identificar dos de las principales misiones franciscanas que congregaban a población guaraní, weenhayek y toba para 1865. En rojo se puede apreciar las actuales demandas territoriales indígenas en los municipios de Entre Ríos y Villamontes y las principales misiones franciscanas.

Mapa 2.1. Departamento de Tarija con misiones franciscanas fundadas en el siglo XVII y XIX y demandas territoriales indígenas actuales



Fuente: Elaboración: Ángelo Lozano, CERDET, 2010.

El ingreso de misioneros franciscanos a partir de 1606 en territorios indígenas²⁷ del chaco tarijeño, permitió con los años la pacificación de parte de las poblaciones nativas y posteriormente abrió paso a la ocupación de la frontera del chaco tarijeño que se dio a partir del avance de grupos de colonizadores ganaderos procedentes de la ciudad de Tarija.

Colonización y ocupación de la frontera chaqueña

Una vez ocupado y poblado el valle de Entre Ríos, la colonia española no pudo ingresar más hacia el oriente por la resistencia de las poblaciones indígenas. Entre 1860 y 1905, los franciscanos lograron fundar varias misiones en el chaco, donde parte de la población indígena buscó refugio temporalmente. Recién a partir de 1907, la República boliviana ingresó en la zona, conocida a partir de entonces como Villamontes, e instaló una administración. Este fue un proceso algo tardío en la historia del país, lo cual se explica porque, a diferencia de las regiones mineras en los andes, en el chaco no se identificaban atractivos económicos y se tenía como limitantes la falta de agua, las elevadas temperaturas chaqueñas que en el verano alcanzaban 40°C y, especialmente, hasta finales de 1890, la resistencia acérrima de las poblaciones indígenas al ingreso de foráneos.

El Estado boliviano impulsó la colonización del chaco, considerado agreste y salvaje, como una forma de sentar su soberanía política y generar un modelo de desarrollo de ganadería extensiva, basado inicialmente en la población criolla y, posteriormente, en familias de origen mestizo procedentes del valle central de Tarija y Chuquisaca. Bajo este paradigma, las poblaciones indígenas chaqueñas no formaban parte de la construcción de un modelo de desarrollo, pues se las consideraba primitivas, hostiles y un estorbo para la extensión de las haciendas ganaderas, a menos que formen parte de la fuerza de trabajo para las haciendas.

En Villamontes, desde 1907,²⁸ la mayor parte de la extensión de las tierras fue adjudicada a pobladores de origen criollo mestizo dedicados a la actividad de crianza de ganado vacuno, en tanto las poblaciones indígenas eran arrinconadas hacia zonas marginales. Ello produjo su migración hacia la frontera del chaco salteño en Argentina, como relata el antropólogo sueco JanAke Alvarsson (1988) al referir lo sucedido con familias tobas en 1918.

27 Fray Manuel Mingo, 1981.

28 En 1905 se produce la llamada revolución liberal que expulsa a los franciscanos de las misiones en Villamontes en 1907, quedando estos territorios bajo administración del Estado, que pasaría a distribuir las tierras a familias de colonizadores criollos.

El descubrimiento de reservas petroleras en el chaco tarijeño en 1925 es considerado como una de las causas que impulsaron el desencadenamiento de la Guerra del Chaco entre Bolivia y el Paraguay (1932-1935), y que propiciaron indirectamente flujos inmigratorios moderados. A la finalización de esta contienda bélica y luego de la reforma agraria boliviana en 1953, sólo tres grupos indígenas permanecerían en la región del chaco tarijeño (los guaraníes, los weenhayek y los tapietes), ocupando una reducida extensión de su hábitat tradicional y siendo discriminados por la población colonizadora castellano-hablante que se veía a sí misma como defensora y pobladora de las zonas de frontera y portadora de valores de la civilización cristiana occidental.

Estos dos grupos, los indígenas y los criollos colonizadores criadores de ganado vacuno, son los que han constituido hasta el presente las dos principales identidades sociales rurales en los municipios de Entre Ríos y Villamontes, en una estratificación jerárquica que se mantuvo hasta finales de 2000 cuando la población criolla, amparada por los gobiernos republicanos y centralistas, ocupaba la mayor cantidad de tierras y también los cargos públicos, así como desempeñaba distintas profesiones que se iban conformando en los incipientes centros urbanos de ambos municipios.

La actividad ganadera fue vista desde un inicio como “la vocación productiva del chaco villamontino” debido a las pasturas naturales existentes, las vastas llanuras al este del Aguarañe y la presencia del río Pilcomayo donde los animales se abastecían de agua todo el año. Por el contrario, en Entre Ríos donde sólo una parte de su extenso territorio es apto para la ganadería, la población se dedicó principalmente a actividades agrícolas extensivas de cultivo de maíz y maní, enfrentando dificultades y limitaciones por el acceso a agua para riego, la minifundización de la tierra y una geografía física muy accidentada.

El segundo *boom* petrolero, que generó apogeo entre 1966 y 1973 en zonas como Villamontes y Camiri (ubicada al norte de la región), declinó rápidamente en los siguientes años. El agotamiento de los pozos, cuya perforación sólo llegaba hasta unos 1.800 metros de profundidad debido a la tecnología disponible, produjo una dinámica económica urbana bastante débil en ambos municipios hasta el año 2000. No obstante, Villamontes fue recibiendo flujos inmigratorios moderados mientras que Entre Ríos fue expulsando constantemente parte de su población económicamente activa.

La ciudad de Villamontes tuvo un crecimiento poblacional más continuo que la localidad de Entre Ríos, debido a corrientes migratorias procedentes del valle central tarijeño y de áreas rurales del chaco chuquisaqueño. La nueva

población se fue asentando en el área urbana, pero sin contar con un aparato productivo articulado, más allá de la ganadería que abastecía de carne a los centros urbanos del departamento de Tarija y el crecimiento de un pequeño sector campesino productor de cítricos, sandías y verduras. Por su parte, la actividad pesquera comercial en el río Pilcomayo, de ser casi inexistente hasta 1950, llegó a tener un crecimiento importante en las décadas de 1980 y 1990, con una extracción que se estima entre unas 900 a 1.200 toneladas en los mejores años.²⁹

Con esas estructuras productivas, el empleo público aparecía como uno de los pocos espacios institucionales que ocupaba relativamente a un pequeño sector urbano, por lo que las complejas luchas político-partidarias para ocupar cargos públicos eran parte de la dinámica central en estos dos centros urbanos. Hasta el año 2000, ambos municipios aquejaban niveles crónicos de desempleo y subempleo de gran parte de su población urbana; también niveles elevados de pobreza extrema que afectaba en gran parte su población rural.

2. Actores sociales y organización sociopolítica en Entre Ríos y Villamontes

A continuación describimos los principales actores sociales en los dos municipios seleccionados para la presente investigación, ambos en la región chaqueña del departamento de Tarija. Consideraremos a la provincia O'Connor como parte de la región chaqueña, por compartir características de ecosistema de esta región, aunque parte de esta provincia también es caracterizada como una zona de transición entre los valles interandinos y la llanura chaqueña. La población guaraní de esta provincia forma parte de la nación guaraní en Bolivia asentada en el chaco boliviano.

Los pueblos indígenas

Lo indígena en Bolivia es una categoría que engloba a grupos culturalmente distintos y que históricamente no se sentían parte de una misma identidad social colectiva. Los grupos étnicos a los que nos referiremos como indígenas resistieron los procesos de discriminación étnica, cultural, política y económica hasta lograr, a partir de 1990, la lenta y progresiva recuperación de parte de su territorio, el reconocimiento de sus derechos culturales y un paulatino empoderamiento po-

²⁹ Estimaciones realizadas por personal del CERDET en base a entrevistas con concesionarios ween-hayek, 2009 y 2010.

lítico, que se hace evidente con el arribo al poder del primer indígena a la presidencia del país en enero de 2006.

En dicho proceso de revalorización de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas y campesinos, entre 1990 y el 2006, se puede resaltar la contribución de la cooperación internacional europea dirigida a la realización de reformas estatales descentralizadoras, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el trabajo desarrollado por ONG extranjeras y bolivianas, lo que también contribuyó al fortalecimiento de organizaciones rurales campesinas e indígenas.

Son muy elocuentes las afirmaciones del Documento País elaborado por la Comisión Europea:³⁰

“Desde 1976, la Comisión Europea ha prestado ayuda a casi todos los procesos políticos, sociales y económicos por los que ha atravesado este país. Esta contribución se ha materializado principalmente a través de la cooperación bilateral, la financiación de organizaciones no gubernamentales y, desde 1998, un importante programa de seguridad alimentaria...” pág. 17.

“La prevención de conflictos ha sido un objetivo indirecto explícito de la cooperación de la CE (Comisión Europea) en Bolivia a partir de 2003, con especial énfasis en cuestiones de desarrollo alternativo y en la consolidación de la democracia y el consenso”... pág. 18.

“Bolivia es un importante beneficiario de ayuda al desarrollo, tanto de donantes bilaterales como multilaterales. Esta ayuda supone cerca del 10% de su PIB. En 2004, el 58% del presupuesto de inversión del Estado provino de la cooperación internacional”. pág. 19.

Hay también interpretaciones críticas y negativas hacia los resultados conseguidos con los recursos de la cooperación extranjera en Bolivia en sus diferentes niveles (multilateral, bilateral, desde instituciones religiosas y laicas a organizaciones de la sociedad civil y/o organizaciones de base)³¹, lo cual es un tema que merece ser estudiado en mayor profundidad y rebasa los objetivos de este capítulo.

30 Comisión Europea, (2007).

31 Antonio Rodríguez Carmona, 2009.

Según manifestó Roberto Laserna hacia el año 2003:

“Las agencias de cooperación internacional han tenido y tienen aún un papel muy influyente en el proceso político boliviano. En parte se debe a la significativa dependencia del país. Cerca de la mitad de la inversión pública proviene de donaciones y créditos concesionales en los que ellos tienen gran capacidad de decisión. Su capacidad es aún mayor cuando el sistema político o el gobierno no pueden definir sus prioridades con claridad, o cuando la presión social inmoviliza la toma de decisiones. Con todo, la cooperación internacional ha sustentado y apoyado el proceso de modernización del país, financiando el déficit de un Estado que tiene una base tributaria muy débil y pequeña. Frente a las dubitaciones y oscilaciones en la actitud de los sucesivos gobiernos con respecto a los cambios institucionales de sus predecesores, las entidades internacionales muchas veces actuaron presionando en defensa de la continuidad del proceso”.³²

“Otro actor clave de todo el proceso es la Iglesia Católica. Por un lado, sus movimientos de base, formados por religiosos, sacerdotes y laicos, han animado instituciones no gubernamentales que contribuyeron a la reorganización de los sectores populares que fueron claves en la lucha contra las dictaduras y en la resistencia al ajuste estructural. Muchas de esas instituciones sustentan el nuevo comunitarismo tanto como el viejo populismo corporativo”.³³

Los grupos étnicos presentes actualmente en el chaco tarijeño y que son reconocidos como actores sociales y políticos activos de ambos municipios son tres y son los siguientes:

1) Los guaraníes

Los guaraníes habitan en los dos municipios seleccionados para el estudio, su población aproximada es de 3.600 habitantes, distribuidos en 36 comunidades en el municipio de Entre Ríos y unas 1.700 personas en 12 comunidades en el municipio de Villamontes. Los rasgos fisonómicos indígenas en un grupo significativo de pobladores de la ciudad de Villamontes hacen presumir que esta cantidad sería mucho más elevada, no obstante ellos no se identifican en la actualidad con dicha etnia.

32 Roberto Laserna, 2003, pág. 21.

33 Ídem.

En ambos municipios, la población guaraní se dedica habitualmente a actividades agrícolas y conviven generalmente en comunidades denominadas “mixtas” con familias campesinas inmigrantes. En Entre Ríos hay unas nueve comunidades que se dedican a la pesca en el río Pilcomayo, crían animales menores (cabras y cerdos) y, recientemente, en otras 10 comunidades se trabaja en la crianza de ganado vacuno. La organización guaraní en este municipio es indudablemente una de las mejores organizadas en el chaco tarijeño y en sólo dos décadas ha logrado un reconocimiento social y político inesperado, cuando años atrás una gran parte de sus comunidades carecían de títulos de propiedad y parte de su población asentada en propiedades ganaderas estaban sometidas a un modelo de explotación económica y social caracterizada como “empatronamiento”.³⁴

En Entre Ríos la organización guaraní ha accedido al derecho de demandar una Tierra Comunitaria de Origen y a la titulación de 91 mil ha³⁵ (hacia el año 2010), y aspira a que el Estado pueda reconocerles unas 216 mil ha.³⁶ Una dificultad en este reconocimiento es que al interior de la demanda territorial se han identificado alrededor de 120 propiedades no indígenas, varias de las cuales están amparadas por la misma Ley INRA promulgada el año 1996.

Las comunidades guaraníes en el municipio de Villamontes conviven con familias campesinas mestizas en las llamadas comunidades mixtas, lo que entre otras razones complicó la posibilidad de plantear una demanda de Tierras Comunitarias de Origen, por lo cual actualmente sus comunidades han sido saneadas por el Estado boliviano como comunidades rurales individuales. La migración temporal de su población joven para la búsqueda de empleo es frecuente, los destinos incluyen el norte argentino.

34 El empatronamiento incluía un sometimiento a condiciones de trabajo obligatorio para la hacienda, que generalmente no era remunerado en dinero sino con víveres, coca y ropa. Los indígenas eran sujeto de actitudes explícitas de discriminación étnico cultural, la falta de libertades políticas y de ejercicio de derechos de ciudadanía. Este régimen de explotación y semi-servidumbre concluyó hacia el año 1994-1996 gracias al proceso de reorganización iniciado en 1989. (Miguel Castro, 2004).

35 Las tierras dotadas en su mayor parte están ubicadas en zonas de pendiente y no son potencialmente aptas para la agricultura por este motivo y por la escasez de fuentes de agua.

36 La Ley INRA establece que el Estado deberá dotar a las comunidades las tierras necesarias para su sobrevivencia socioeconómica y cultural, pero como los propietarios no indígenas tienen también derecho a conservar las tierras que cumplen una función económica y social, hay un porcentaje cercano al 50% de las tierras que se espera sean entregadas por el Estado a las TCO guaraníes en Entre Ríos y a los weenhayek en Villamontes y Yacuiba. El problema es que la ley no especifica si esto ocurrirá en cinco o cien años.

A principios de 2011, un asambleísta guaraní del Itika Guasu fue elegido Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, un hecho histórico tomando en cuenta la pertenencia a este grupo poblacional minoritario.

2) *Los weenhayek*

El pueblo Weenhayek está compuesto por unas 3.500 personas, de las cuales unas 2 mil residen en el municipio de Villamontes, la mayoría de ellas en el margen derecho del río Pilcomayo y unas 400 personas en un barrio de la misma ciudad. Más del 76% se identifican como pescadores (CERDET - Consultora DEL 2009) y la mayoría de las mujeres como artesanas que elaboran tejidos de una fibra vegetal, conocida como carawata. En 1992 los weenhayek demandaron la recuperación de un territorio de 195 mil ha y, recién durante los años 2008 y 2009 se logró titular 30.176 ha; se espera que en 2011 se alcancen las 48 mil ha.

En 1990, habían registradas 16 comunidades asentadas bajo una excesiva presión demográfica en sólo 5.600 ha. Hacia el año 2010, al contar con mayor cantidad de tierras tituladas, el número de comunidades se incrementó rápidamente llegando a 45, como una forma de consolidar la ocupación de su territorio todavía con una demanda de tierras en curso; adquirir reconocimiento como organización comunal y por lo tanto con derecho a recibir recursos de su organización matriz; y como estrategia para disminuir los conflictos intrafamiliares en comunidades sobrepobladas y afectadas por un proceso de deterioro ambiental debido al sobre-pastoreo, desertificación, cambio de clima, reducción del nivel de lluvias, etc.

El pueblo Weenhayek es uno de los sectores rurales con mayores niveles de pobreza extrema, reside en zonas con bajos niveles de precipitación pluvial y elevadas temperaturas promedio en verano, y ha atravesado mayores dificultades de organización intercomunal por divisiones internas entre sus líderes comunales. Un estudio efectuado el año 2009³⁷ revela que más del 81% de su población no logra cubrir sus necesidades nutricionales en el periodo fuera de la temporada de pesca (entre octubre y marzo). En época de pesca, esta actividad se ha convertido en una de las principales generadoras de ingreso, aunque en mayor medida para unas 70 familias que gozan de la condición de concesionarias de puestos de pesca.³⁸

37 CERDET - Consultora DEL, *Informe de Línea Base en seguridad alimentaria. Pueblo Weenhayek y Guaraní. Villamontes - Tarija*, 2009.

38 En 2010 existían alrededor de 35 concesiones pesqueras exclusivas para familias weenhayek, las cuales pertenecen a familias ampliadas, por ello consideramos como mínimo dos familias emparentadas en promedio a cargo de la administración de los puestos de pesca.

Desde el año 1997, varias empresas petroleras (Brittish Gas, Petroandina, y el Consorcio Transierra integrada por Petrobras, Total y Andina) han realizado nuevos trabajos exploratorios de extracción de hidrocarburos o de instalación de ductos que atraviesan el río Pilcomayo en cuatro áreas al interior de la demanda territorial del pueblo Weenhayek. Luego de complejas negociaciones iniciadas el año 2001 y concluidas hacia 2005, la organización del pueblo Weenhayek (la ORCAWETA) acordó con tres de estas empresas recibir en total un monto anual cercano a los 200 mil dólares, ello ha agudizado las pugnas internas por el acceso a cargos de liderazgo, la captura de espacios de poder donde se decide la redistribución interna de dicha renta; también ha generado divisiones internas en los últimos cinco años. No obstante, se observa también un mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa y de salud debido a la reciente intervención del Proyecto Educativo Indígena (PEI), financiado por la cooperación bilateral holandesa, e implementado a través del Ministerio de Educación, el municipio de Villamontes y la organización indígena. Con el ingreso de recursos económicos procedentes de las regalías petroleras se observa, desde el año 2007, una inversión del municipio y del Corregimiento Mayor de Villamontes destinada a la construcción y ampliación de nueva infraestructura educativa.

El pueblo Weenhayek de Tarija es uno de los pocos pueblos indígenas que obtuvo el reconocimiento de un calendario escolar diferenciado del resto del sistema escolar público; logro que se concretizó hacia finales de 1990 mediante la gestión ante el Estado de sus maestros bilingües y con apoyo de la Misión Evangélica Sueca. Dicho calendario articula las vacaciones escolares con el ciclo anual de la temporada de pesca (abril-septiembre) para que los niños puedan acompañar a sus familias durante esta actividad ocupacional. Esto ha reducido la deserción escolar y ha facilitado una mayor dedicación de las familias a la pesca comercial.

Son relevantes también los avances, iniciados en la década de 1980, en la implementación pionera de un sistema de educación bilingüe, que se aplica hasta el tercer año de primaria y que, hacia el año 2010 ha permitido el ingreso a la actividad laboral de cerca de ochenta maestros interinos bilingües, de los cuales una decena está profesionalizado. Desde mediados del año 2000, estos maestros están afiliados a la Federación Sindical de maestros rurales de Villamontes y se han integrado a la dinámica de tipo sindical de esta organización.³⁹ Dentro de las 700 familias weenhayek, el grupo de maestros, aproximadamente ocho enfermeros auxiliares y los propietarios de concesiones de pesca, son un segmento que ha logrado un ingreso económico mensual regular que garantiza la seguridad alimentaria de sus familias. No sucede lo propio en el resto de la población indígena.

39 Testimonios de dos maestras y un maestro bilingüe en Villamontes y Capirendita, 2009 y 2010.

La actividad pesquera, a lo largo de 140 kilómetros, está concesionada a familias del pueblo Weenhayek. Se estima que, entre abril y agosto, esta actividad genera un mínimo de 1 millón 200 mil dólares, distribuidos entre las familias weenhayek, unas pocas familias guaraníes que participan como asalariados y algunos trabajadores criollos mestizos. Ello forma parte de una cadena productiva y comercial que involucra a centenares de familias criollas y mestizas dedicadas al transporte, comercialización y preparación de alimentos. Sin embargo, concluida la época de pesca, entre los meses de octubre a marzo, más del 81% de las familias weenhayek enfrentan un periodo de inseguridad alimentaria, y adoptan diversas estrategias de subsistencia, entre ellas la captación de rentas de empresas (gasíferas y de extracción de ripio y arena) que actúan dentro del territorio. La distribución de tales rentas ha generado pugnas entre las comunidades del pueblo Weenhayek y al interior de ellas.

3) *Los tapietes*

Los tapietes son un grupo étnico sobre el cual se debate todavía su origen histórico. Mientras algunos miembros de esta comunidad creen pertenecer a la familia guaraní, se ha sugerido que los tapietes podrían haber sido “guaranizados” (Hirsch, S. en I. Combes 2005) o que su origen estaría emparentado con los mataco (hoy weenhayek) chorote (Nordenskiöld 2002), lo que es muy poco probable. Actualmente, los tapietes suman unas 85 personas (Arce *et al.* 2003), de las cuales sólo 50 viven en la comunidad de Samaihuate, localizada a unos 120 Km de Villamontes, y el resto en comunidades weenhayek. Debido a su escaso número en Bolivia, se están formando nuevas familias en base a alianzas matrimoniales con mujeres weenhayek y personas del pueblo Guaraní.

Los tapietes se dedican a la caza, la pesca en el río Pilcomayo y a actividades de agricultura de subsistencia rústica. Disponen de un territorio recuperado de 24.800 ha, reconocido por el Estado boliviano en 2001. El año 2010 les ha sido reconocido el derecho a tener un asambleísta en la Asamblea Legislativa Departamental y otro asambleísta en la Asamblea Regional del Chaco. Aunque están organizados de manera independiente, participan activamente en eventos interétnicos.

El sector ganadero

El sector ganadero ha sido el actor económico más fuerte y con mayor influencia política en Villamontes y en Entre Ríos entre la década de 1970 hasta el año 2000. Su dirigencia tuvo significativa influencia en la elección de autoridades locales y en la designación de los alcaldes hasta 1984, con lo cual, no obstante los exiguos

recursos de los gobiernos locales (en comparación con lo observado a partir de la explotación gasífera desde el año 2000), los propietarios más grandes de tierras recibieron mayor atención de parte de las entidades públicas locales y departamentales. Esto fue corroborado mediante entrevistas, donde se manifestó que en Villamontes “los que reciben mayor atención son los que tienen mayor capacidad de organización, como la Federación de Ganaderos”.⁴⁰ Ello revela que la influencia política del sector ganadero es todavía importante y serían sus grupos dirigenciales los que más se benefician, a pesar del reclamo de los afiliados menos afortunados sobre la poca atención del Estado.

En Villamontes, hasta el año 2000, se estimaba cerca de 700 propiedades ganaderas afiliadas a la Federación de Ganaderos; hacia 2010 se menciona que el número de familias inscritas fue de más de mil.⁴¹ Una posible división de propiedades ganaderas explicaría en parte este crecimiento. Según datos del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PRONEFA),⁴² los propietarios ganaderos de Villamontes manejaban la mayor cantidad de ganado vacuno en todo el departamento de Tarija, (aproximadamente 100.118 unidades), distribuidas en casi tres millones de hectáreas.⁴³ Se calcula que sólo un número cercano al 5% podría ser considerado como grandes productores con hatos mayores a 400 cabezas de ganado.

Llama la atención que una parte significativa de los propietarios ganaderos, grandes y medianos (que no superan el 20% del total de las familias ganaderas), residen también en la ciudad de Villamontes. La mayoría de estas familias ha logrado reunir los excedentes económicos necesarios que les permitieron a varios de sus hijos acceder a la universidad en ciudades cercanas y lograr cargos públicos. Se ha observado que las relaciones de parentesco entre algunas familias ganaderas y funcionarios públicos ha facilitado la elaboración y ejecución de proyectos favorables para el sector ganadero⁴⁴ lo que no se ha dado tan claramente en los sectores campesino e indígena, donde la mayoría de su población adulta no ha concluido estudios secundarios. Podemos concluir que los profesionales procedentes de familias ganaderas constituyen un segmento importante de la burocracia pública y facilitan alianzas y políticas públicas favorables al sector ganadero, al que también pertenecen.

40 Entrevista a un profesional agrónomo en Villamontes, 2010.

41 Testimonios de dirigentes ganaderos de Villamontes entrevistados.

42 PRONEFA, 2010. Resumen del Catastro en el departamento de Tarija proporcionado por el Dr. Ricardo Lema.

43 Entrevista con el vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Villamontes, 2009-2010.

44 Hasta el año 2000 el sector ganadero era identificado como el principal generador de riqueza en Villamontes, era un sector con influencia casi determinante en las instancias públicas locales.

El proceso de doble residencia de las familias ganaderas, también se observa en el municipio de Entre Ríos, aunque no es tan contundente como lo es en Villamontes. Más precisamente, los contados grandes propietarios ganaderos y concesionarios de áreas forestales residen generalmente en la ciudad de Tarija y han visto debilitados sus lazos políticos en Entre Ríos. Hacia el año 2010, se calculaba unas 1.200 familias ganaderas en Entre Ríos; sin embargo, hay que destacar que una parte de los pequeños productores ganaderos también se identifican como campesinos, lo cual indica que se trata de productores con cantidades reducidas de ganado mayor. Según datos del PRONEFA, en Entre Ríos se contabilizaron 49 mil cabezas de ganado, esto es, cerca de la mitad de las existentes en Villamontes.

Para la mayoría de los pequeños y medianos propietarios ganaderos de Villamontes y Entre Ríos, la producción ganadera enfrenta problemas de sequía, escasez de forraje para sus animales, degradación de los suelos por sobrepastoreo y un estancamiento económico debido a la falta de capital que les permita realizar inversiones de importancia para la instalación de cerramientos y cultivo de pasturas. La gran mayoría de las propiedades ganaderas emplea un sistema de crianza extensivo, lo que limita el incremento de la productividad y la renta. Este sistema de crianza extensiva está en desventaja por falta de competitividad en calidad ante la importación de carne vacuna procedente de Santa Cruz y el norte argentino, que está copando crecientemente los mercados urbanos de Tarija desde el año 2000.

Como el municipio de Villamontes dispone desde 2005 de mayores recursos públicos (procedentes de las regalías y el impuesto a los hidrocarburos) que el Municipio de Entre Ríos, el Corregimiento Mayor de Villamontes está invirtiendo agresivamente en la perforación de un centenar de pozos semi-profundos y la construcción de más de una decena de tanques australianos, como una medida que trata de solucionar parcialmente la escasez de agua en unas 100 propiedades ganaderas (de las 700 registradas) del municipio.

En Villamontes, cerca de 138 propiedades ganaderas se encuentran al interior de la demanda del pueblo Weenhayek y aproximadamente más de 30 serán afectadas por recortes de tierra, parcial o total, por el no cumplimiento de la función económica y social, un requisito establecido por la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En Entre Ríos, más de 132 propiedades ganaderas y campesinas se encuentran también al interior de la demanda territorial del pueblo Guaraní del Itika Guasu. Igualmente, aquellas propiedades que no cumplan la función económica social serán revertidas total o parcialmente en beneficio de las comunidades indígenas. Este prolongado proceso

de revisión de la propiedad de la tierra (iniciado en 1996) no ha concluido todavía en ambos municipios pero ya ha generado tensiones y conflictos violentos entre ambas poblaciones, promoviendo un escenario de confrontación política y social y de competencia en el cual uno de los sectores cree que ganará o perderá tierras a expensas del otro.

El sector campesino

La población campesina de origen mestizo se ha asentado primero en Entre Ríos desde mediados del siglo XIX y, posteriormente a partir de la década de 1960, en el municipio de Villamontes, mediante flujos migratorios del valle central de Tarija y la región del chaco chuquisaqueño.

En Entre Ríos, el sector campesino es un sector más numeroso que el de Villamontes y está presente en más de 120 comunidades rurales. La mayoría procede, desde 1960, del valle central de Tarija y de departamentos vecinos (Potosí y Chuquisaca). Los campesinos poseen pequeñas propiedades y están ubicados en estrechos valles; debido a limitaciones de acceso a sistemas de riego, todavía es predominante el cultivo basado en el régimen de lluvias. Sus principales cultivos son el maíz, la soya y las hortalizas.

En Entre Ríos, el origen heterogéneo de la población migrante campesina, y su dispersión geográfica incide todavía en la definición de su identidad cultural, que se debate entre sentirse parte de la cultura campesina chapaca,⁴⁵ conformar los aspectos culturales de una cultura propia entrerriana o compartir la identidad chaqueña.⁴⁶ En ambos municipios, desde la década de 1980, los campesinos se han organizado en centrales campesinas bajo un modelo de sindicatos rurales. Su organización sindical ha coordinado acciones reivindicatorias con el movimiento campesino del valle central de Tarija y las otras regiones del departamento de Tarija, a excepción de la provincia Gran Chaco. Es principalmente un sector dedicado a la agricultura de maíz, maní y más recientemente de hortalizas.

En el municipio de Villamontes el arribo esporádico de inmigrantes de origen campesino mestizo desde el valle central de Tarija, y desde el chaco chuquisa-

45 Lo chapaco es la identidad regional del valle central tarijeño que valoriza la influencia española y la religión católica combinada con la cultura local campesina y que se ha formado desde muy temprano en el siglo XVI.

46 Testimonio de una mujer entrerriana en un taller de difusión de resultados de la investigación en julio 2010.

queño desde 1960,⁴⁷ ha ido conformando un sector campesino relativamente pequeño, que se ha ubicado generalmente al norte de la ciudad de Villamontes, en las faldas de la Serranía del Aguarañe, donde existen varias fuentes de agua que les permite desarrollar una agricultura con riego y la producción de cítricos (naranjas, mandarinas), hortalizas (tomate, cebolla y papa), maíz y sandías.

Debido a las elevadas temperaturas y los escasos sistemas de riego, la actividad agrícola fue muy débil. Hasta el año 2003, la mayoría de los productos agrícolas eran traídos desde la ciudad de Tarija; luego, el esfuerzo de las familias campesinas de la región chaqueña logró incrementar la producción de cítricos, sandías y hortalizas en la estrecha franja de tierras ubicadas al norte de Villamontes. Ello consolidó un pequeño sector campesino con acceso limitado a fuentes de riego y tierras, ubicado en algunas comunidades mixtas con familias guaraníes.

Los campesinos han logrado tener mayor incidencia en las políticas públicas del municipio de Villamontes desde el año 2000, ya que desde esta instancia se busca promover un sector productivo que abastezca a la región con productos locales. Un efecto de ello es que, desde hace pocos años, la producción local de tomates de invierno se destina a la ciudad de Tarija.

Hasta el año 2006 la organización campesina sindical era muy débil y no estaba muy articulada con el movimiento campesino del departamento de Tarija, lo que recién se observa con el ascenso del gobierno indigenista de Evo Morales y, más precisamente, desde el año 2007, cuando se organiza para defender las reformas adoptadas por el gobierno nacional frente a las movilizaciones organizadas por los partidos de oposición. Actualmente es un sector con peso político propio en el municipio.

El peso demográfico de la población campesina se hace más evidente en el municipio de Entre Ríos con la participación política de las centrales campesinas en las elecciones locales designando los candidatos para los cargos públicos bajo las banderas del partido gobernante a nivel nacional.

47 Las migraciones al chaco tarijeño tuvieron un repunte a partir de 1960 impulsadas por la dotación de cinco hectáreas por familia campesina que efectuó la reforma agraria promulgada el año 1953. En el chaco villamontino que es más apto para la ganadería que la agricultura la ocupación de la tierra fue más improvisada, por lo que varias familias accedieron de hecho a propiedades que varían entre las 300 hasta las 2 mil ha.

Los menonitas

En el chaco, la migración de cerca de dos centenares de familias menonitas tradicionales hacia el municipio de Villamontes, Entre Ríos y Yacuiba es un fenómeno reciente iniciado a finales de 1990, y la mayoría proceden de la zona oriental del Paraguay.

Las colonias menonitas no tienen una relación significativa con las instituciones estatales ni con otras organizaciones sociales. Sin embargo, por su dinámica económica, su producción de leche y quesos se ha incrementado rápidamente y ocupa un mayor espacio en el mercado de Villamontes y en la ciudad de Tarija. Este grupo se dedica también al cultivo de la soya en Yacuiba y Villamontes, y a la crianza de ganado lechero bajo un sistema de estabulado.

El sector urbano

En el municipio de Villamontes, la fuerte relación económica y social de las familias rurales (ganaderas, campesinas e indígenas) con el centro urbano ha generado un relativamente significativo crecimiento de su población urbana. A ello se añade la llegada de inmigrantes de municipios vecinos del chaco chuquisaqueño, localidades del valle central tarijeño e incluso de familias ganaderas del chaco salteño (Argentina) que se asentaron en este municipio desde la década de 1960. No habiendo dato censal, el fuerte crecimiento poblacional se observa en el periodo 2002 a 2010 en la cantidad de población mayor de 18 años que se inscribió para participar en las elecciones de dicho año (ver Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Cambios en la población urbana y rural entre 1992 y 2010

	Censo 1992 N° habitantes rural y urbano	Población rural 1992	Población urbana 1992	% de población urbana Censo 1992	Censo 2001 N° habitantes rural y urbano	Población rural 2001	Población urbana 2001	% de población urbana Censo 2001	Diferencia intercensal de habitantes	Inscritos en la Corte Departamental Electoral (2010)*
Municipio de Villamontes	19.568	8.482	11.086	56,65	23.765	7.652	16.113	67,8	4.200	18.897
Municipio de Entre Ríos	17.763	17.763			19.339	16.921	2.418	12,5	1.576	9.833
Departamento de Tarija	291.407	159.438	77.024	26,43	391.226	247.736	143.490	36,67	99.819	264.747

*personas mayores de 18 años habilitadas para votar⁴⁸.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo Nacional 1992 y 2001; Corte Nacional Electoral.

48 Según la OPS en Bolivia el 39,62% de la población es menor de 15 años. Lo que nos lleva a concluir que las personas habilitadas para votar superan el 50% de la población de cada municipio. <http://www.ops.org.bo/condsalud/situaciondemografica/1-terceraparte.htm>

Sorprende que, en la localidad de Entre Ríos, el crecimiento urbano y rural en los últimos cincuenta años sea bajo. Ello se podría explicar por las limitaciones productivas agropecuarias y forestales, las que no lograron generar y dirigir el excedente económico a actividades comerciales y de servicios en su reducido centro urbano. Tradicionalmente, la producción agrícola campesina estaba más orientada hacia el autoconsumo e intercambio a nivel local y es, recién desde el año 2006, como resultado de mayor inversión pública con fondos de las regalías del gas, que se observa una relativa dinámica económica en Entre Ríos (en un porcentaje menor que la observada en Villamontes). Aún así la población mayor de 18 años inscrita para votar es aproximadamente la mitad de los inscritos en Villamontes.

En el año 2001, en Villamontes es notable el crecimiento urbano, en detrimento de la población rural; en los años posteriores al *boom* hidrocarburífero se percibe un mayor crecimiento de la mancha urbana en gran parte atribuible a la inmigración de pobladores de municipios vecinos. El próximo censo poblacional dará más luces sobre el impacto de la inmigración y crecimiento urbano en Villamontes.

Se puede afirmar que en ambos municipios, hasta el año 2006 la conformación de sus grupos dirigenciales ha estado influida por la pertenencia a un partido político, en función del grupo que estaba en el gobierno nacional, y por el grado de status socioeconómico generalmente dado por actividades relacionadas con la extracción de madera y la ganadería. La designación de los candidatos de los partidos políticos tradicionales más fuertes para los cargos locales dependía estrechamente de las estructuras políticas nacionales y de las ubicadas en la ciudad de Tarija, respectivamente. Esta dependencia generó un sentimiento pro-descentralización en municipios como el de Villamontes y el de Entre Ríos. En Villamontes esto se tradujo en la demanda de autonomía política y económica respecto de la capital departamental, lo cual fue además resultado del escenario político de pugnas entre sectores sociales, organizaciones y regiones para acceder a una mayor participación en la renta hidrocarburífera.

A excepción del empleo público en los sectores de educación, salud, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, el resto del empleo para la población urbana de ambos municipios ha estado en actividades comerciales y de servicios, de baja rentabilidad. Los cambios económicos provocados por la extracción de hidrocarburos, observados con mayor fuerza desde el año 2004, dado el incremento de las regalías e impuesto a los hidrocarburos (IDH) explican la nueva dinámica socioeconómica y política que se está viviendo en todo el país y con mayor fuerza en el departamento de Tarija. La sección presentada a continuación se ocupa de estos cambios.

3. Procesos de cambio socioeconómico y político impulsados por la actividad hidrocarburífera

Bolivia ha atravesado por dos ciclos de expansión de la producción hidrocarburífera. El primero fue en el periodo 1924-1937, con una etapa de nacionalización en 1937, y concluyó a principios de 1940 con el agotamiento de los pozos. A mediados de 1960 el país experimentó un nuevo *boom* económico y, en 1967, se nacionalizaron los pozos petroleros que estaban en manos de la empresa norteamericana Gulf. Sin embargo, la mayoría de los pozos se agotaron para 1976 y la renta petrolera fue mínima en adelante. Hasta fines de la década de 1980, Tarija recibía entre tres a seis millones de dólares. Este ingreso administrado de forma burocrática y política, desde la capital departamental, financió proyectos agroindustriales como dos fábricas de azúcar, una planta industrializadora de leche, una fábrica de papel, vidrio, cemento, y de aceite; de éstas las fábricas de papel y vidrio no funcionan en la actualidad por problemas de corrupción y la de aceite ubicada en Villamontes ha sido reactivada recién en 2008 con capitales extranjeros y privados nacionales. Otra parte de los recursos se invirtió en la instalación de servicios básicos, principalmente en la ciudad capital y, en menor medida, en ciudades menores como Yacuiba. La insuficiente asignación de recursos para las provincias más rurales alimentaría más tarde la frustración y el reclamo de sus poblaciones, empobrecidas y subempleadas. Al producirse el tercer *boom* hidrocarburífero en la década de 2000, la lucha de las provincias y secciones municipales por acceder a una más amplia distribución de la renta departamental desencadenó un conjunto de movilizaciones de carácter regional y sectorial en todo Tarija. Lo propio sucedió a nivel nacional, especialmente en las deprimidas regiones andinas.

Es innegable que el nuevo *boom* económico iniciado el año 2001, basado en la explotación y exportación de gas natural tuvo un impacto cuantitativo y cualitativamente más importante que el de los periodos anteriores en el ámbito económico y social, tanto en Bolivia, como en el departamento de Tarija y los municipios de Villamontes y Entre Ríos. En esta ocasión el gobierno neoliberal, en 1997, apostó por atraer inversión transnacional con miras a la exportación del gas como *commodity* en el mercado internacional, a cambio de una estructura impositiva muy favorable para las empresas transnacionales.

Dado que más del 70% de la producción de hidrocarburos se localiza en el chaco tarijeño, a partir del año 2004, el incremento de las regalías e impuestos benefició a la población tarijeña y en especial de los pobladores chaqueños.

En un principio para el año 2000 se esperaba en Villamontes, y en menor medida en Entre Ríos, un fuerte impacto en el nivel de generación de fuentes de empleo y contrataciones de servicios realizadas por las empresas transnacionales⁴⁹ y las empresas petroleras capitalizadas.⁵⁰ Muchos pobladores locales sintieron un shock cultural con el inicio de grandes proyectos ligados con la actividad hidrocarburífera, como lo relata un profesional de una empresa transnacional al comparar los acontecimientos en el período 2001-2010:

“El cambio en Villamontes es abismal, ahora hay infraestructura, hoteles, alimentación, antes era difícil encontrar dos o tres personas (especializadas), todo el mundo se dedicaba a la pesca, agricultura. (...) El cambio se produjo en 2001 cuando se hizo el gasoducto (Yacuiba-Río Grande) y se puso el campamento que tenía casi 2 mil personas, con gente de toda Bolivia. La gente en Villamontes empezó a despertar, a capacitarse, pero ya era tarde. La construcción duró un año. Nunca se pensó en una visión de preparación para que cuando haya empresas se tenga gente e infraestructura... En ese momento se vio el enfrentamiento entre zonas, Yacuiba versus Villamontes, Villamontes contra Machareti. Todos querían que su gente sea tomada (contratada)”.

Una funcionaria de otra empresa describió los cambios en Villamontes de la siguiente manera:

“En Villamontes las empresas de perforación, de sísmica, de construcción de plantas, etc., han hecho que se dé un desarrollo comercial grande. Ese panorama es real, pero eso no es sostenible porque en algún momento las empresas se irán”.⁵¹

La llegada de centenares de trabajadores de las empresas elevó los precios de los alquileres de las viviendas y del costo de vida en los centros urbanos donde se instalaban, también impulsó la construcción de nuevos hoteles familiares. Sin embargo, en los municipios con mayor presencia de empresas hidrocarburíferas, el impacto respondió al pago de impuestos y regalías antes que a la acción directa de éstas en la economía departamental. En este sentido, si bien el *boom* gasífero se inicia el año 2001, es evidente que el incremen-

49 Repsol, British Gas, BP, Petrobras, Total Fina Elf.

50 Empresas que se forman con la semi-privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en 1997, y que se conforman en Andina, Chaco y Transredes. Esta última a cargo del transporte de hidrocarburos a través de ductos. El control de las decisiones pasó a las empresas transnacionales con mayoría de acciones.

51 Entrevista a dos funcionarias de una empresa petrolera, 2010.

to de las regalías hidrocarburíferas se ha visto multiplicado por las políticas públicas nacionalistas promovidas por el Movimiento al Socialismo desde el año 2004 y profundizadas el año 2007. Así, al normarse que el departamento productor percibiría como regalías el 15% del total de las ganancias hidrocarburíferas y, recientemente, un 4% más por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los ingresos anuales del departamento de Tarija pasaron de aproximadamente tres millones de dólares en 1988 a más de 270 millones en 2008.⁵²

Este nuevo escenario político y económico se estableció luego de un violento conflicto político e ideológico entre un sector político nacionalista (principalmente apoyado por sectores campesinos, indígenas y urbano populares de las áreas andinas del país) y un sector con una visión económica más liberal, defendida por sectores políticos y empresariales y respaldados por sectores urbanos de clase media de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, y parte de Cochabamba y Chuquisaca.

Este conflicto político ideológico, que dividió al país desde el año 2003 hasta 2009, se ha replicado al interior del departamento de Tarija con un enfrentamiento político que aglutina por un lado al partido oficialista (con base en sectores campesinos, indígenas, y sindicatos urbanos) y por otro a partidos de la oposición, que aunque en retroceso y con posiciones defensivas, son apoyados por una parte de los sectores urbanos.

Se puede afirmar que el escenario político anterior a 2006 estaba conformado casi exclusivamente por partidos políticos policlasistas, liderados por miembros de las élites políticas urbanas y empresarios privados. Los líderes políticos a nivel nacional mantenían una relación clientelista con sus militantes partidarios en base a la disposición de puestos de empleo en varios niveles del aparato burocrático estatal. Era notorio entonces la permisividad o tolerancia hacia estrategias lícitas e ilícitas de enriquecimiento económico, en base a la ubicación en la función pública, y sin un control del sistema de justicia para sancionar delitos cometidos por autoridades públicas. De esta forma, hasta el año 2003, con un Estado afectado por niveles de corrupción generalizados, la planificación de políticas públicas de desarrollo sufrían la injerencia de intereses políticos regionales y empresariales para orientar la escasa inversión pública disponible hacia los sectores urbanos más poblados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

52 Reporte Energía. Disponible en: http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=1120%3Aen-cinco-anos-tarija-recibio-us-900-millones-por-regalias&Itemid=60

El nuevo escenario político iniciado el año 2006 nos muestra la emergencia y relativa consolidación de una amplia alianza de organizaciones de tipo sindical y étnico en torno a un partido político (MAS), considerado como su “instrumento político”⁵³ para el ejercicio del poder estatal y en torno a un caudillo único, que pretende consolidar un discurso político y cultural hegemónico. Ello fue acompañado por la apertura del sistema electoral a agrupaciones ciudadanas y de organizaciones indígenas o campesinas, que se incrementan en número a nivel municipal y departamental y que han debilitado a los partidos tradicionales que anteriormente tenían la exclusividad de la representación política en los niveles estatales. Estas reformas del Estado, promovidas desde el año 2006, apuntaban a generar: medidas de redistribución económica hacia los sectores sociales con menores ingresos, nuevos derechos constitucionalizados para el ejercicio de cargos públicos (asambleístas nacionales, departamentales, y regionales del chaco en base a pertenencia étnica), y derechos para que las organizaciones indígenas con base territorial puedan ejercer en el futuro competencias político administrativas territoriales y de administración de justicia en base a usos y costumbres tradicionales.

También se avanzó en el reconocimiento de autonomías departamentales con capacidad legislativa a nivel departamental y una “curiosa” autonomía regional para la región del chaco tarijeño (al cual pertenece el municipio de Villamontes) que llama la atención por haberse acelerado en la provincia que cuenta con mayores reservas de gas del país. Ello ha sido parte de las pugnas discursivas sobre el derecho preferencial a ser más beneficiados que el resto del departamento y del país, lo cual se expresa en propuestas atomizadoras, segregacionistas y egoístas en los discursos con tintes regionalistas (intra-departamentales) y que han sido apoyados por el gobierno nacional desde 2008 para debilitar la oposición política en el departamento de Tarija.

Esta reconfiguración del Estado nacional y subnacional, que se visualiza en varias normas legales como la nueva Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, y en la correlación de fuerzas políticas en los gobiernos nacional y departamental (dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la Asamblea Departamental), ha sido favorable para las organizaciones populares y se constituyó en el marco de referencia para la acción política de los actores sociales colectivos a nivel de las regiones y espacios locales. Habiendo dejado atrás la “simple demanda de reivindicaciones económicas”, ahora las estrategias de las organizaciones sindicales y étnicas apuntan a acceder a mayores espacios de

53 Las organizaciones sociales que conforman hoy el MAS-IPSP fundaron inicialmente el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos IPSP, como una estrategia para pasar de las reivindicaciones económicas laborales a la toma del control político estatal.

poder público y la conformación de alianzas intersectoriales a fin de lograr una mayor influencia en el aparato público y la recepción de proyectos de desarrollo sectorial.

Dicho de otra manera, a nivel municipal en Villamontes y en menor medida en Entre Ríos, las alianzas y estrategias políticas entre la mayoría de actores sociales organizados en sindicatos, organizaciones indígenas, partidos políticos y otros gremios corporativos, se efectivizan, en gran medida, en relación y afinidad con las posiciones adoptadas por sus organizaciones matrices a nivel nacional (por ejemplo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el partido del MAS, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación de Maestros urbanos y rurales, las confederaciones de ganaderos a nivel departamental y nacional). Esto es así por el peso relativo de estas confederaciones y partidos en la toma de decisiones políticas o su influencia en los espacios administrativos, políticos, judiciales a nivel nacional.

Los anteriores sectores de élite y conservadores de Villamontes y Entre Ríos, agrupados en partidos políticos nacionales que monopolizaban la participación política, han sufrido las repercusiones de las fuertes derrotas electorales en los últimos cuatro años de los partidos políticos tradicionales de centro y derecha y el fracaso de su estrategia de movilización activa y ocupación de oficinas públicas en cuatro departamentos de Bolivia el año 2009. Como resultado del fracaso de la oposición política de los partidos locales de derecha de Villamontes y Entre Ríos, se dio un desbande y disgregación de sus niveles organizativos, lo que explica el incremento de agrupaciones ciudadanas a nivel local municipal y regional del chaco, como es el caso del Partido Autónomo Nacional (PAN) que integra a autoridades locales de partidos tradicionales en el chaco tarijeño y que han optado por aliarse a los que eran sus enemigos declarados en años precedentes.

Lo señalado permite afirmar que las dinámicas territoriales económicas y políticas, desde el año 2006, han sido altamente dependientes de la cantidad de recursos procedentes de las actividades hidrocarburíferas y de las luchas entre sectores sociales y municipios que aspiran a ser beneficiados con mayores porcentajes de la renta hidrocarburífera. También se ha observado que, las poblaciones del departamento de Tarija y de los municipios de Villamontes y Entre Ríos perciben que, desde el año 2004, el fuerte incremento de la inversión pública del gobierno departamental y municipal ha dado lugar a una nueva dinámica territorial relacionada con la ampliación de la infraestructura vial y de servicios básicos (luz, agua, gas natural) en los centros urbanos y varias zonas rurales del departamento. Por ello, existe un consenso generalizado para

defender el 11% de las regalías, como una compensación justa por ser el mayor departamento productor. Esta distribución de regalías es cuestionada por las otras regiones del país que consideran excesiva la renta petrolera asignada a las regiones productoras como Tarija, la cual concentra menos del 6% de la población nacional y el 5,4% del territorio nacional.

Se espera que la inversión pública departamental tenga significativo impacto al finalizarse el asfaltado de la vertebración caminera, iniciado el año 2005, que unirá la ciudad capital con todas sus provincias y permitirá el tránsito continuo, a diferencia de lo que todavía sucede con las interrupciones de carreteras en época de lluvias. Se espera también que con este mejoramiento de los caminos se brinde mayor seguridad a la población, en general afectada por frecuentes accidentes en rutas de montaña muy angostas e inestables.⁵⁴ Otros efectos esperados son la disminución de los costos de transporte, que tendría impacto en la producción agropecuaria, la reducción del tiempo de viaje y la reducción en el desgaste de los vehículos utilizados. No obstante, se ha observado también que la lucha política al interior de la nueva Asamblea Departamental ha demorado la reanudación de obras en la construcción de esta carretera, la cual forma parte de uno de los tres corredores bioceánicos que cruzarán Bolivia en el futuro.

A nivel departamental pero también a nivel de los municipios de Villamontes y Entre Ríos, los distintos actores sociales y políticos valoran la fuerte inversión en la infraestructura de salud, educación y la extensión de la red de electrificación en la mayoría de las comunidades rurales, por beneficiar principalmente a la población en general y particularmente a la de las provincias que estuvieron en el pasado marginadas por el Estado nacional y el departamental. Asimismo, los programas sociales a nivel departamental y nacional tienen impacto en la reducción de los niveles de pobreza extrema y moderada, lo cual se atribuye a la abundancia relativa de recursos públicos para la inversión que, desde el año 2006, ha permitido extender la cobertura de servicios básicos a la mayoría de los sectores sociales. No obstante el avance, son todavía varios los sectores sociales que reclaman que sus condiciones de vida no mejoraron significativamente y demandan una asignación directa de recursos para sus organizaciones.

54 Percepción común testimoniada en entrevistas con pobladores de las áreas rurales y urbanas de Tarija. Un segmento de la población chaqueña se ha abstenido durante años de viajar a la capital departamental por temor a sufrir un accidente en las carreteras de tierras que atraviesan seis cadenas montañosas.

El periódico el País describía así la demanda de la dirigencia campesina del departamento de Tarija en el año 2008:

“Ante esa situación, dijo Alfaro, los campesinos exigen la transferencia directa, hacia las comunidades campesinas, de los recursos económicos que llegan al departamento, producto de la explotación de los hidrocarburos. Los campesinos serán los que de manera directa ejecuten los proyectos de fomento e incentivo a la actividad productiva y, de esa manera, garantizarán el suministro de productos hacia las ciudades del departamento”.⁵⁵

Alianzas políticas entre los actores sociales

Analizando las tendencias de la inversión pública a nivel nacional, departamental y municipal a partir del *boom* del gas (que se orientan en base a la correlación de alianzas, fuerzas políticas y estrategias electorales), y sus efectos en las dinámicas territoriales en los municipios de Villamontes y Entre Ríos podemos ir corroborando algunas de las hipótesis propuestas por esta investigación relacionadas con los factores que más han incidido en el cambio de la situación social y económica de los distintos sectores sociales y el establecimiento de alianzas coyunturales o estratégicas.

Desde la recuperación de la democracia en 1983 y hasta el año 2005, los partidos políticos tradicionales a nivel nacional lograron concertar una coalición de alianzas entre sí, que contemplaba la rotación del poder entre elites políticas locales aliadas con el sector ganadero, y con una fuerte base en la clase media y barrios urbanos. Los sectores campesinos e indígenas en los dos municipios estudiados, diferenciados histórica y socialmente del sector ganadero mediano y grande, han tenido serias limitaciones para la consolidación de estructuras productivas sostenibles que les permita a la mayoría de sus miembros, solo en base al esfuerzo de los miembros de sus familias, salir de círculos de pobreza económica e incrementar los niveles de productividad.

Las limitaciones mencionadas anteriormente y que se evidenciaban hasta el año 2009 son: escasa cantidad de precipitación pluvial (entre 300 a 500 ml), procesos de degradación de suelos por sobrepastoreo, prolongadas sequías, escasa cantidad de tierras para las familias campesinas promedio, falta de capital financiero para la inversión en insumos, mala calidad de vías carreteras que los vincule de

55 Periódico *El País*, Tarija, 21 de noviembre de 2008.

manera económica y rápida con centros urbanos y falta de capacitación en el manejo de plagas y comercialización.

A nivel político hasta 2005, los sectores campesinos tarijeños apoyaban generalmente a diversos partidos políticos tradicionales. Desde el triunfo del MAS a nivel nacional, la mayoría del sector campesino, y recientemente una parte de la población indígena se siente identificada con el gobierno nacional encabezado por Evo Morales, en un proceso de múltiples articulaciones sociales y políticas con las grandes federaciones corporativas y étnicas. La población indígena en Entre Ríos y Villamontes mantiene a nivel local una ambivalencia política en sus relaciones con las autoridades locales y con el partido del Movimiento al Socialismo. Grupos dirigenciales del sector ganadero formaron parte de los partidos tradicionales en el poder y por lo tanto fueron aliados estratégicos de las élites urbanas, de la cual una parte de los ganaderos y sus hijos con títulos profesionales también formaban parte. Los sectores medios urbanos y profesionales aliados con el sector ganadero se hacían cargo de la administración pública y con una mirada más hacia el ámbito urbano y en segundo lugar hacia una visión de desarrollo rural en torno a la ganadería.

Las familias campesinas no estaban cohesionadas, y al igual que las familias indígenas, se adherían a los partidos políticos más fuertes que distribuían algunos beneficios económicos a los líderes comunales. Esta subordinación política rural a lo urbano ha cambiado de manera al parecer irreversible desde finales del año 2005, hasta verse en algunas ocasiones en los municipios tarijeños, como en el resto del país, un enfrentamiento entre los sectores campesinos e indígenas rurales con los urbanos, y un cuestionamiento de sectores populares urbanos y rurales contra los partidos políticos tradicionales, representados por familias tradicionales y de mejor condición económica, como resultado del apoyo popular y rural hacia el proyecto nacionalista encabezado por el Movimiento al Socialismo, y las oportunidades de acceder a parte de la renta procedente de las regalías petroleras, a través de la participación protagónica en la lucha electoral y la toma del poder político por medio de alianzas a nivel popular y entre las organizaciones de tipo sindical y étnico en todos los niveles de articulación local y nacional. Algunas demandas de mayor participación en la Asamblea Plurinacional provocó un distanciamiento de la organización matriz de los pueblos de tierras bajas, la CIDOB, que se mantiene crítica hacia las políticas públicas, mientras que algunas regionales como la APG han optado por estrechar su alianza con el gobierno nacional.

Es posible pensar que el constante incremento anual de la renta gasífera desde 2004, que se redistribuye de manera importante en los departamentos produc-

tores como Tarija con el 15% del total de las ganancias, haya tenido una incidencia en la generación de expectativas de los diversos sectores sociales, por acceder a parte de estos beneficios ya sea de manera directa o indirecta. De esta manera se puede entender el aumento de las demandas sociales en todo el país, al observarse en la casi totalidad de los sectores sociales un consenso implícito y positivo respecto a la actividad hidrocarburífera. Es así, que desde el año 2004, sea por haber accedido a espacios de poder en algunos municipios, o por ser reconocidas como actores sociales prioritarios, las comunidades rurales campesinas e indígenas han recibido de manera creciente una mayor atención de los gobiernos municipales y de los gobiernos locales que dependen de la Prefectura de Tarija.

La Federación de Ganaderos de Villamontes ha asumido un rol más pasivo desde 2006, debilitada por la derrota de los partidos tradicionales, que expresaban sus intereses. Esto es evidente al apoyar el gobierno nacional de manera más contundente el proceso de saneamiento de tierras para poblaciones indígenas, ante lo cual los afiliados a la federación ganadera afectados por recortes y desalojos reaccionan de manera más individual, y no encuentran un respaldo efectivo por parte de su institución representativa.

Desde el año 2004 se visibilizó el crecimiento de la inversión pública en la ciudad de Villamontes y, a partir del año 2006, se hizo efectiva progresivamente una mejor atención al área rural, centrada en programas sociales, construcción y refacción de viviendas y letrinas, construcción de tanques de almacenamiento de agua y mejoramiento de caminos comunales. La disponibilidad de importantes montos económicos procedentes de las regalías y el IDH permitían, por vez primera, la realización de varias obras en el área rural; con ello las autoridades municipales y locales consiguieron su reelección, apoyadas por las familias que se beneficiaron en esta nueva etapa de inversiones. Esta alianza política entre campesinos e indígenas con el gobierno nacional establece un nuevo tipo de relación social y política, en la que ambos sectores se benefician mutuamente, aunque a nivel local continúen participando en la arena electoral con sus propias siglas y candidatos; así, los campesinos estuvieron generalmente identificados con el MAS, mientras los indígenas prefirieron hacerlo con sus organizaciones indígenas.

Si analizamos el desarrollo de los acontecimientos políticos en el Gran Chaco, que culminaron con la aprobación de una singular y única autonomía regional, cabe resaltar que, en el año 2003, los delegados cívicos y políticos de la capital departamental de Tarija defendieron en el parlamento nacional y en los medios de prensa el derecho a seguir percibiendo el 11% del total de las regalías petroleras medidas

en boca de pozo.⁵⁶ Se argumentó que en el departamento de Tarija se encontraban casi el 80% de las reservas de gas de todo el país y que era un reconocimiento histórico por la marginación efectuada por el Estado centralista que había beneficiado primordialmente al eje troncal formado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los tarijeños proclamaban el derecho a establecer un modelo de desarrollo económico en base a un proyecto territorial que incluía a todo el departamento de Tarija y cuya articulación, por medio de una carretera bioceánica, impulsaría las potencialidades productivas de la región tarijeña.

Los representantes cívicos y políticos de los tres municipios (Yacuiba, Villamontes y Entre Ríos), que conforman la provincia del Gran Chaco en el departamento de Tarija, a imagen y semejanza de las posturas que plantearon los delegados tarijeños en el escenario nacional, a su vez reclamaron en las Mesas de Concertación establecidas por el prefecto del departamento en el año 2003 su derecho a recibir el 45% del total de las regalías departamentales, en correspondencia a casi el 45% de la superficie que ocupa esta provincia en el departamento; además de ser la provincia que contenía la casi totalidad de las reservas de gas en el departamento. De no ser así se comenzaba a advertir que la provincia del Gran Chaco intentaría separarse y constituirse como un nuevo departamento.

Las autoridades políticas departamentales finalmente reconocieron, por medio de un acuerdo interno, el derecho de estos tres municipios a recibir el 45% de las regalías departamentales por ser las áreas de producción hidrocarburífera. También, junto con los representantes de cada municipio, se acordó una distribución equitativa entre los tres municipios para favorecer un crecimiento económico y demográfico equilibrado en la región del chaco y no reproducir procesos de acumulación y centralización excesiva en sólo uno de los centros urbanos en detrimento de los otros.

Desde entonces el municipio de Villamontes, con una población cercana al 5% del total departamental, logró que se le asigne el 15% del total de las regalías e impuestos que recibe el departamento de Tarija, al igual que los otros dos municipios de Yacuiba y Caraparí. Este acuerdo favorable para este municipio ha permitido una fuerte inversión pública en obras de infraestructura y

56 La reivindicación de los departamentos productores (Santa Cruz, Tarija y Cochabamba) de recibir el 11% del total de las regalías se inició durante el segundo *boom* hidrocarburífero ocurrido entre 1966 y 1976, a raíz de los reclamos de las autoridades cívicas y políticas. Este porcentaje se ha constitucionalizado en la nueva Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, aunque ya era criticado en el 2003 por parte de la población de los departamentos no productores que creen que es un porcentaje demasiado elevado. PNUD, *Informe de Desarrollo Humano 2003*, La Paz.

programas sociales del gobierno departamental. No obstante la asignación presupuestal, el gobierno local de Villamontes frecuentemente reclamaba que la Prefectura de Tarija demoraba y obstruía la aprobación de algunos proyectos presentados, lo que provocaba que una parte de las regalías destinadas al chaco no pudieran ser invertidas. A su vez, los funcionarios prefecturales contestaban que los errores de forma y fondo contenidos en el diseño final de los proyectos, debían ser corregidos antes de lograr su aprobación en la ciudad de Tarija.

Una vez obtenido cierto grado de autonomía económica a nivel administrativo, las autoridades locales chaqueñas, otrora dependientes de los partidos políticos capitalinos, se animaron en el año 2009 a buscar su autonomía política, lo que se concretó con la elección de los ejecutivos seccionales de cada municipio.⁵⁷

La historia del municipio de Entre Ríos fue diferente. Hasta el año 2003 ya se habían explorado cuatro pozos de gas, dos de los cuales resultaron exitosos. Sin embargo, los representantes cívicos y políticos no supieron aprovechar oportunamente la posibilidad de acceder a una redistribución similar a la que recibirían los municipios del Gran Chaco, una vez iniciada la explotación del Campo Margarita. A los pocos meses los tres municipios chaqueños se embarcaron en un conflicto de límites con el municipio de Entre Ríos aduciendo que el Campo Margarita pertenecía al municipio de Villamontes y, por lo tanto al Gran Chaco, a pesar de que hasta entonces el municipio de Entre Ríos había atendido de alguna manera a la población del cantón donde se encuentra el referido campo gasífero. La definición de la pertenencia de este campo al área de Entre Ríos, no pudo ser decidida por el gobierno departamental por temor a las presiones políticas y el discurso separatista de los tres municipios chaqueños. Por consiguiente todavía el 45% los recursos de regalías e IDH del Campo Margarita es entregado a la Provincia Gran Chaco y no a Entre Ríos.

A nivel político, las organizaciones campesinas e indígenas se han aliado con el partido de gobierno por lo que han experimentado un fuerte empoderamiento político en el periodo 2007-2010 y el acceso de algunos de sus miem-

⁵⁷ En la teoría es una autoridad representante del gobierno departamental, pero en la práctica se han convertido en la segunda autoridad territorial que tiende a competir con el alcalde municipal en la ejecución de obras. Se han autodenominado gobernadores regionales, y el Ejecutivo Seccional de Yacuiba se hizo llamar en ocasiones Gobernador Regional de la Provincia Gran Chaco, un nombre que no ha sido aceptado por los municipios de Villamontes y Yacuiba, que buscan preservar el grado de libertad política arrancado a la capital departamental y no someterse a una nueva autoridad centralista a nivel provincial.

bros a cargos políticos de representación en la Asamblea Plurinacional, en la Asamblea Departamental y en la Asamblea Regional del Chaco. En general, las poblaciones indígenas y campesinas de Villamontes y Entre Ríos han votado crecientemente a favor del MAS, pero, a nivel local, no han logrado establecer alianzas electorales debido a que ambos sectores creyeron que podían ganar las elecciones por su cuenta. En un par de ocasiones el sector campesino ha invitado a las organizaciones indígenas a sumarse a sus listas de candidatos pero de manera subordinada, lo que fue rotundamente rechazado por los dirigentes indígenas.

Las alianzas políticas entre sectores campesinos e indígenas son coyunturales e inestables, debido a que ambos sectores compiten por el acceso a la tierra y sus recursos naturales. El sector campesino considera, por ejemplo, que los indígenas weenhayek y, en menor escala, los guaraníes, no están interesados en producir de manera regular sus tierras. En tanto, los campesinos inmigrantes y locales impulsan el lema “la tierra es de quien la trabaja” como una forma de reclamar el derecho a que se les dote de la tierra suficiente que sea trabajada por ellos mismos. Este conflicto por la tierra se percibe en el Proyecto Villamontes-Sachapera, al interior de la demanda territorial weenhayek, donde hay también propietarios ganaderos interesados en acceder a cerca de 350 ha con riego del río Pilcomayo.

El sector indígena aunque no ha desarrollado actividades económicas rentables (a excepción de la pesca comercial), sí tiene un peso importante en el escenario de concertaciones políticas y su posición como actores sociales claves para el desarrollo local es reconocida por entidades privadas y públicas. El empoderamiento político todavía no se ha traducido en una mejora económica de las familias indígenas más rurales, porque en la realidad el empoderamiento ha resultado ser el de los líderes de las organizaciones, que han encontrado nuevas oportunidades laborales en el ámbito público y se están convirtiendo en protagonistas de los bandos políticos en pugna. Si hay una mejora en el ingreso económico de algunas familias indígenas en Villamontes, esta es resultado de una redistribución vía programas sociales o de compensaciones económicas entregadas por empresas petroleras. Lo que no se observa es una mejora en sus actividades productivas, sea en infraestructura productiva, mayor acceso al agua o capacitación técnica.

Las campañas a favor del respeto por la naturaleza y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas han generado una aceptación a nivel constitucional y normativo de consultas públicas antes de que se realicen obras en territorios indígenas, como lo promueve el Convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2008. El cambio es radical tomando en cuenta que, en la década de 1970, la empresa nacional YPFB podía ingresar en cualquier propiedad y abrir zanjas de exploración de 40 metros de ancho sin tener que compensar nada a las propiedades afectadas, al tratarse de una obra declarada de prioridad nacional. Con las nuevas normativas internacionales y nacionales, las empresas petroleras transnacionales (Petrobras, British Gas y Transierra), y las empresas nacionalizadas (Transierra, Andina y Chaco) han tenido algunas dificultades y demoras para ingresar a explorar y explotar en tierras indígenas y campesinas. En algunos casos, se debió a las preocupaciones de tipo ambiental y, en otros, a reclamos de compensación económica por los desmontes que se realizarían en la apertura de brechas de exploración y en el tendido de ductos, o por impactos sociales que pudiesen provocarse como resultado de accidentes (roturas de ductos, explosiones, etc.).

Una autoridad indígena de una comunidad weenhayek en Villamontes expresó su interpretación del derecho a la consulta que deben hacer las empresas petroleras de la siguiente manera:

“...no es posible que personas extrañas y empresas de afuera entren en nuestro territorio, que es nuestra casa grande, y que entren sin permiso. ¿Acaso a ellos les gustaría que yo vaya y entre a su patio, a su cocina?, ¿No se van a molestar? Y luego ellos se van a chupar todo lo que está bajo la tierra, van a ganar mucho dinero, y nos van a dejar el suelo hueco, y nosotros tenemos que seguir en la pobreza mientras ellos se hacen ricos. Por eso nosotros les exigimos que nos hagan una consulta, nos expliquen qué es lo que van a hacer y que nos paguen por los árboles que van a cortar, y por los tubos que van a poner para cruzar el río, donde nosotros vamos a pescar”.⁵⁸

Desde otra perspectiva, un funcionario de una empresa contaba su experiencia:

“Cuando se iba a las comunidades nos decían que no tenían servicios básicos, pedían todo. En las negociaciones no se ofrecía dar (todo) tipo de apoyos, se sabía que los recursos no iban a alcanzar para todo. Se buscó negociar con municipios”.⁵⁹

58 Testimonio de Don José Torrez de Vizcacheral, ex líder de la comunidad. Villamontes, 2010.

59 Entrevista realizada en Santa Cruz, 2010.

Otro empleado que participó en reuniones con organizaciones indígenas manifestaba:

“Hoy en día hay mecanismos de consulta, pero también se han vuelto mecanismos de chantaje. Ahora los inversionistas están esquivando muchos lugares”.⁶⁰

Una persona de otra empresa señalaba que:

“Actualmente hay una preocupación con la licencia ambiental antes, era tres a cuatro meses, ahora puede durar entre siete a doce meses... Se van a apalancar proyectos que sean sustentables. Para ello se ha buscado alianzas. Lo que hace viable el tema de sostenibilidad es a través de alianzas entre el Estado, la comunidad y la empresa. Se buscan alianzas por sostenibilidad, también porque cada actor tiene su rol y responsabilidad y también porque cada sector tiene su expertise”.⁶¹

Luego de acuerdos y negociaciones que incluían la compensación de impactos socio ambientales, las empresas han establecido una relación de comunicación y compensación directa con las organizaciones indígenas desde el año 2001 hasta el año 2006. La APG de Yacuiba ha recibido un monto estimado de 500 mil dólares en nueve años. Se estima que la organización ORCAWETA ha recibido desde el año 1999 hasta el 2010 un monto mínimo de 900 mil dólares. Unos 220 mil dólares fueron invertidos los primeros años en la construcción de unas 220 viviendas.

Luego de 2006, la empresa estatal YPFB es la responsable de guiar el proceso de consulta. El problema de una eficiente inversión de estos recursos es incierto en el caso del pueblo Weenhayek debido a las presiones de dirigentes indígenas locales por acceder a estos fondos para cubrir la subsistencia de sus familias, dejándose de lado la posibilidad de invertir en áreas claves como la educación o actividades de producción agropecuaria. En el periodo 2002 a 2004, parte de estos recursos fueron administrados bajo la modalidad de proyectos de infraestructura y servicios, pero luego la presión por parte de los dirigentes ha llevado a que se entregue el dinero a cambio de facturas que respalden algún gasto colectivo (calaminas, motocicletas, etc.). En cambio, en algunas organizaciones guaraníes, como la del Itika Guasu en el municipio de Entre Ríos, los escasos montos recibidos han sido mucho mejor administrados debido a la creciente

60 Ídem.

61 Ídem.

organización indígena y los consensos alcanzados entre sus dirigentes a lo largo de una experiencia organizativa de más de veinte años. Por su parte, las organizaciones campesinas no lograron obtener compensaciones económicas de importancia, en comparación con las comunidades indígenas, debido a que no estaban amparadas por el Convenio 169 de la OIT y por ser varias las familias campesinas de origen inmigrante y establecidas en ambos municipios en las últimas cuatro décadas.

En este contexto, las empresas trasnacionales desarrollan sus actividades económicas y mantienen una relación estrecha con instituciones públicas y organizaciones indígenas y campesinas, a través de acciones de responsabilidad social empresarial. Estas, a decir de un empleado de una empresa, se han ido modificando, pasando de una etapa en la que “cuando alguien hablaba hay que hacer algo por el desarrollo en las comunidades. La respuesta de las empresas era yo pago mis impuestos, el Estado tiene que hacer desarrollo” a otra en la que las empresas se involucraban más. Así, una relacionadora comunitaria de otra empresa señalaba que han habido aprendizajes compartidos y que:

“Las empresas, en términos de su dinámica de interrelación con las comunidades y municipios, también han aprendido. Antes lo que se hacía era asumir un papel más paternalista y no se tenía una visión a futuro. Ahora hay elementos que a las empresas les fortalece al asumir acciones de responsabilidad social corporativa y en el tema de inversión social se tiene mayor impacto porque las inversiones sociales se busca que sean sustentables”.

Desde una perspectiva crítica se puede afirmar que las políticas de responsabilidad social corporativa, aplicadas por parte de empresas petroleras en beneficio de organizaciones indígenas en las tierras bajas de Bolivia, y que se expresan en políticas de compensación económicas responde a la mayor presión social de las mismas organizaciones y del marco jurídico internacional y nacional. Los reclamos indígenas se amparan en convenios internacionales (Convenio 169 de la OIT del año 1989, y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que procuran el respeto a los derechos de las poblaciones.

En este caso las organizaciones indígenas han podido negociar o acordar con empresas petroleras pagos por uso temporal de sus territorios para el tendido de ductos o perforación de pozos gasíferos, conocidos como servidumbre, y otros pagos por concepto de posibles impactos sociales y ambientales. Las empresas petroleras han insistido en presentar estos pagos como acciones voluntarias de responsabilidad social empresarial.

Las comunidades campesinas y propietarios ganaderos no cuentan con los mismos derechos que las comunidades, por lo cual sus negociaciones han sido más desfavorables y de mucha menor cuantía. Los acuerdos realizados con propietarios ganaderos en general son reservados y de acuerdo a la cantidad de terreno afectado por la actividad hidrocarburífera.

Desde la experiencia de CERDET, se sostiene que las acciones y visiones de cada empresa petrolera con relación a los pagos realizados a organizaciones indígenas difieren entre sí. Algunas empresas aceptan entregar montos de dinero significativo, sin hacer un seguimiento o evaluación de los resultados, porque están interesados en concluir sus trabajos en el menor tiempo posible. Son muy pocas las empresas que implementan mecanismos de planificación de la inversión a efectuarse y acompañan las acciones de inversión social. Entre los riesgos de una inversión deficiente han estado el gasto en objetos de consumo perecedero, por lo que los recursos entregados no adquieren la cualidad de ser factores de inversión o multiplicación, así como el peligro de que la mayor cantidad de recursos entregados a algunas organizaciones terminen siendo capturados por algunos grupos dirigenciales.

El sector ganadero ha tenido más influencia en el gobierno departamental y en la Subprefectura de la provincia O'Connor. En el municipio de Entre Ríos colocó concejales en varias de las gestiones. Pero, también, recientemente, ha tenido que compartir espacios de poder con el sector campesino y guaraní. Por otro lado, la influencia política del sector campesino creció en los últimos diez años, al identificarse con el partido del gobierno nacional y por su alianza con las centrales campesinas de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija.

A su vez, la organización indígena guaraní en Entre Ríos ha realizado diversas alianzas con sectores urbanos y familias campesinas. Su concejal municipal ha adquirido experiencia en la gestión pública, generando una visión positiva respecto a su trabajo, que beneficia a gran parte de los sectores rurales. La tensión en las relaciones de conflicto entre la organización guaraní y los sectores ganaderos disminuyó, aunque ambos sectores mantienen una relación de competencia que reproduce la polarización social y política a nivel nacional. Ello, en palabras del gobierno, significa la "confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el ámbito institucional –puede ser en el ámbito parlamentario y también en el social– de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social ascendente..." (García Linera 2007). Respecto al destino de la inversión pública,

en el municipio de Entre Ríos, los mayores ingresos públicos procedentes de la renta petrolera están siendo destinados de manera diversificada a los tres sectores rurales predominantes (campesinos, ganaderos e indígenas en menor medida) aunque con énfasis en infraestructura de servicios (escuelas, salud, caminos vecinales, etc.), y en inversiones de infraestructura en el pequeño centro urbano, mientras que la demanda sociales la de un apoyo más específico en el área productiva agropecuaria y forestal.

Desde un análisis de las alianzas político electorales, se observa que en el periodo 2005 a 2008, la polarización era clara entre el discurso regionalista tarijeño liderado por los partidos tradicionales de corte liberal democrático con el gobernador Mario Cossío (2006-2010) y el proyecto indigenista y campesino de Evo Morales. Desde el año 2009, el apoyo del gobierno nacional a las demandas autonomistas de Villamontes, Yacuiba y Caraparí, ha quebrado la alianza entre los dirigentes del chaco y los de la ciudad capital.

Visto desde las alianzas electorales en las elecciones nacionales de diciembre de 2009 y las municipales de abril de 2010, tres partidos recibirían la mayor cantidad de votos: a) el Partido Autonómico Nacional (PAN), que es el nuevo partido regionalista del chaco que pretende quebrar la dependencia de la capital departamental y tomar el control político de las instituciones; b) el MAS, que crece en votación pero que no logra una victoria definitiva; y, c) Camino al Cambio, que es el partido del gobernador Mario Cossío y opositor al gobierno de Evo Morales. (Ver Cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Elecciones de Ejecutivo Seccional en Villamontes

	Votos	Porcentaje
Partido Autonómico Nacional	5.638	43,4%
Movimiento Al Socialismo	4.584	35,3%
Camino al Cambio	2.775	21,4%

Fuente: Corte Nacional Electoral, 2010.

Una situación similar se dio en Entre Ríos con la concentración de los votos en las tres fuerzas políticas arriba mencionadas.

Con ello, la estrategia del MAS para derrotar finalmente a las fuerzas opositoras del Gobernador Departamental fue la de hacer alianza con el partido regionalista del chaco y, de esta manera, tomar el control de la Asamblea Departamental que terminaría por suspender al gobernador Cossío, a mediados de diciembre de 2010.

4. Conclusiones y recomendaciones

El proceso político que vive Bolivia, el cual se reproduce en el departamento de Tarija, es el de una sociedad en transformación provocada por una revolución social y cultural. Una alianza entre diferentes organizaciones sindicales y étnicas, organizadas en torno a un partido político nacionalista de base campesina e indígena, ha logrado desplazar electoralmente las élites de partidos políticos tradicionales que controlaban los aparatos estatales, para reemplazarlas por nuevas élites dirigenciales de origen sindical y de organizaciones indígenas y campesinas, aliadas con una burocracia técnica y política identificada con el partido de gobierno que propone un nuevo proyecto estatal con características socialistas y comunitarias. La toma del poder por el MAS, a nivel del gobierno nacional, se profundiza desde el año 2009 en un avance para intentar el control de las gobernaciones departamentales autónomas y los municipios locales.

Los partidos políticos y sus élites dirigenciales que fueron desplazados del gobierno nacional en el año 2005, se refugiaron en sus regiones, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija. Sin embargo, estos son cuestionados, cada vez con más fuerza, por el movimiento indígena y campesino, empoderado política y socialmente y reconocido por la nueva Constitución Política del Estado que lo identifica como parte principal de la sociedad organizada, competente para ejercer un control social en el aparato público. Por ejemplo, la aprobación de una ley de investigación de fortunas y que busca sancionar actos de corrupción cometidos desde el año 1990, es uno de los instrumentos legales que presiona, desde la justicia y la opinión pública, a las élites de los partidos políticos que controlaban el aparato estatal a nivel nacional y local. El logro de una reforma política administrativa, relacionada con facultades autonómicas a nivel regional, en la práctica, coexiste con un proceso de concentración del poder estatal y una creciente intervención en la economía, así como un creciente control del aparato judicial y electoral.

Desde el año 2004, los procesos de reorientación y redistribución del ingreso público han sido posibles en gran parte gracias a los ingresos crecientes de la renta hidrocarburiífera, percibidos tanto por el gobierno nacional, como por las gobernaciones departamentales, los municipios, las universidades. Además, en base a dicha renta, se creó un Fondo Indígena que, hacia fines del año 2010, disponía de más de 150 millones de dólares a ser transferidos a organizaciones sociales para la ejecución de proyectos productivos y organizativos.

El status social de los pueblos indígenas a nivel nacional y por consiguiente de grupos como los weenhayek, guaraní y tapiete en el departamento de Tarija, ha

mejorado en comparación con la década de 1990, abriéndose nuevos espacios laborales en el ámbito público para los representantes de estos pueblos. Desde abril de 2010, dichos pueblos indígenas acceden a cargos políticos en instancias legislativas como la Asamblea Departamental y la Asamblea Regional de la provincia Chaco. A partir de este hecho, los partidos y agrupaciones políticas han mejorado su trato a las organizaciones indígenas y quieren mejorar sus relaciones políticas con ellas.

Un proceso de mayor empoderamiento político también es experimentado por las organizaciones campesinas del departamento de Tarija, con representaciones más numerosas que las de poblaciones indígenas originarias. Algunas de sus autoridades están accediendo a diversos cargos públicos en las administraciones municipales y, luego de la revocatoria del gobernador elegido en diciembre de 2010 (el ex gobernador Cossío), un campesino (quien fuera antes alcalde de una pequeña población) asambleísta departamental fue elegido interinamente para el cargo de Gobernador Departamental. Además, las organizaciones indígenas y campesinas podrán acceder a formas de administración colectiva de sus tierras, bajo la figura de autonomías indígenas originarias campesinas y estarán facultadas para percibir recursos estatales para el ejercicio de su administración y gestión territorial.

Dado que a nivel local los weenhayek, guaraní y tapiete cuentan con demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), sus derechos exclusivos sobre la tierra y los recursos naturales renovables que fueron recuperando son mayores. Adicionalmente, en negociaciones directas con empresas petroleras, las comunidades guaraníes de Villamontes y las comunidades weenhayek han percibido montos significativos de las empresas petroleras desde el año 2001.

Según la organización indígena ello es una compensación por los impactos socio-ambientales ocasionados. De acuerdo a las empresas se trataría de una acción que es parte de sus políticas de responsabilidad social empresarial y de colaboración con comunidades rurales que están en su área de influencia. A raíz de las formas de organización cultural dicho aporte no se ha invertido de acuerdo a una planificación secuencial, por áreas específicas, como se planteó en un principio, sino que ha sido administrado por decisión de las autoridades comunales en gastos de consumo, adquisición de motocicletas y recursos de movilización lo que ha generado divisiones internas por parte de familias que están en desacuerdo con tal forma de distribución.

A la fecha en que este capítulo fue concluido (2010), en Entre Ríos la única organización indígena, la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu había reclama-

do una compensación a la empresa española Repsol por la perforación de cuatro pozos en su demanda territorial y acordado recibir un pago de 13,5 millones de dólares a partir de 2010 por una intervención que se estima durará unos 20 años. La estabilidad organizativa, el respeto a sus normas organizativas y la generación de lazos de confianza entre sus miembros permiten proyectar un manejo más ordenado y con una visión de inversión en áreas estratégicas para la generación de fuentes de empleo y mejora de la renta familiar.

En toda esta dinámica, los mayores efectos positivos de la explotación de hidrocarburos sobre la producción, el empleo y el ingreso estarían ligados al incremento de inversión pública en infraestructura de carreteras y servicios (educación, salud y vivienda). La inversión en infraestructura para la producción o el apoyo directo a productores se dijo fue casi nula, antes y después del flujo de recursos fiscales y financieros del gas. El Bono Productivo Solidario PROSOL consistente en la entrega a cada familia rural de 285 dólares anuales a cargo de la Prefectura de Tarija, es una de las nuevas políticas que beneficia directamente a los productores ya que está dirigida a la adquisición de ganado menor, la compra de alambre y otras actividades de apoyo a la agropecuaria. Se hace necesaria la creación de instancias de monitoreo y verificación del buen manejo de estos recursos a nivel de las comunidades para resaltar los buenos ejemplos y corregir futuros errores en la gestión de recursos públicos para otros fines no productivos (por ejemplo, compra de vestimenta, etc...).

Desde el año 2005 hasta la fecha, los pobladores de municipios como Villamontes y Entre Ríos perciben un incremento muy importante de la inversión pública en la ampliación de servicios básicos en el área rural y en la infraestructura vial, en el área de salud y educación que integrará las diferentes provincias. También se reconoce la importancia de programas sociales a nivel nacional y departamental dirigido a niños, ancianos, jefes de hogar y mujeres. No obstante, en el municipio de Entre Ríos la inversión pública es menor, pues no se percibe directamente un porcentaje similar de la renta petrolera que recibe Villamontes.

En general, la población de Villamontes atribuye a la actividad hidrocarburífera la posibilidad de que las administraciones municipales y departamentales puedan invertir montos muy importantes en obras de infraestructura largamente anheladas (calles asfaltadas, puentes vehiculares, escuelas, extensión de la red eléctrica, postas de salud, etc.). Hay una percepción compartida de que luego de varios años de marginación, estos municipios pueden ofrecer a sus pobladores obras y beneficios que son inclusivos, y mejorar parcialmente la necesidad de contar con servicios básicos y la creación de algunas ocupaciones nuevas (transporte público a comunidades rurales, trabajo en construcción, etc.). Queda pendiente encontrar maneras de que la producción agropecuaria mejore su producti-

vidad y calidad, pues, curiosamente, gran parte de la población rural se identifica como trabajadores desempleados o sub-ocupados por la falta de herramientas de trabajo y capital, o por la dificultad de acceder a los mercados urbanos con sus productos.

A pesar del empoderamiento político de dirigentes y organizaciones indígenas, hasta el año 2010, las poblaciones indígenas todavía siguen mostrando indicadores socioeconómicos que los ubican como las poblaciones con mayor prevalencia de enfermedades endémicas (mal de chagas, tuberculosis, dengue, etc.), menor acceso a la educación formal a nivel secundario y terciario, y menores ingresos económicos.

En ambos municipios estudiados, el sector ganadero y el indígena, debido a la lucha por la titulación definitiva de sus tierras ocupadas o reclamadas han estado enfrentados política y socialmente entre sí desde la promulgación de la Ley INRA en 1996. Las asociaciones ganaderas han perdido relativamente la influencia política que ejercían en las instituciones locales, porque claramente desde el año 2009 han tenido que ceder parte de los espacios de poder en las instancias estatales locales a las organizaciones campesinas e indígenas. Estas, a su vez, están respaldadas por el gobierno nacional liderizado por Evo Morales, que orienta las políticas públicas hacia una redistribución de la renta pública que beneficie a los sectores populares urbanos y rurales.

Entre todos los departamentos de Bolivia, Tarija es el que mayor cantidad de recursos recibe procedentes de las regalías hidrocarburíferas. Según un índice elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2009 los pobladores de Tarija tienen el mejor ingreso per cápita estimado en 3.920 dólares, monto superior al PIB per cápita de Bolivia de 1.683 dólares según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE).⁶²

Estos beneficios se expresan en una importante inversión en casi todo el territorio departamental y aún más claramente en la región del chaco tarijeño en la ampliación de servicios básicos e infraestructura vial, en programas sociales y en un incremento relativamente pequeño de empleo temporal en el área de la construcción. Sin embargo, todavía no se ha logrado consolidar actividades productivas locales como la ganadería, agricultura y pesca más allá de la entrega de algunos rollos de alambre a una gran cantidad de familias ganaderas, donación de hilos para la elaboración de redes a pescadores, o la entrega de un par de quintales

62 Periódico estatal *Cambio*, 27 de febrero de 2011. <http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-02-27&idn=39796>

con agroquímicos a familias campesinas. Las limitaciones ambientales y la falta de generación de redes de confianza entre actores locales diferentes son todavía un serio desafío por superar. En conjunto, el nivel de conflictividad social se ha incrementado en ambos municipios debido a las pugnas intersectoriales por acceder a mayores cuotas de la renta petrolera, mientras sus poblaciones continúan esperanzadas en presenciar un mayor ritmo en el crecimiento económico local, y una mayor generación de ingresos.

Examinando los niveles de administración territorial observamos una tendencia a una mayor fragmentación administrativa a nivel territorial en Tarija, que hasta la fecha no ha logrado concretar la vertebración carretera del departamento. Además de la administración territorial departamental, se han constituido de manera *sui generis*, once administraciones políticas denominadas legalmente Ejecutivos Seccionales⁶³ que originalmente representaban a la administración del Gobierno Departamental, pero que en 2010 se constituyen en administraciones territoriales casi autónomas y que compiten en varias de sus funciones con los municipios autónomos que tienen una base territorial, en tanto exista la renta petrolera. Adicionalmente, encontramos la nueva Autonomía Regional de la provincia Gran Chaco que comprende tres secciones municipales independientes unas de otras, aunque cuentan con una asamblea común que no está facultada para la emisión de leyes.

Dentro de los dos municipios estudiados, posiblemente dos territorios indígenas podrán acceder al estatus de Territorios Indígenas Originarios Campesinos Autónomos, que ya no tendrán dependencia de la jurisdicción municipal y que posiblemente reciban parcialmente los recursos que anteriormente recibían los municipios. Ello alerta sobre futuros conflictos entre ambas administraciones por la redistribución de estos ingresos. Es recomendable estudiar con más detenimiento, las posibles formas de sostenimiento económico de estas nuevas administraciones autónomas, por la tendencia a depender excesivamente de una renta pública, con poblaciones rurales sub-ocupadas y con ingresos económicos relativamente modestos, dado que la mayoría de la población está exenta de tributar por ser pequeños propietarios o familias campesinas e indígenas.

El incremento excesivo de empleados públicos en los municipios ha generado una burocracia costosa y que no tiene un correlato con la estructura productiva rural y municipal, caracterizada por productores con volúmenes de producción excesivamente pequeños.

63 Estas autoridades se autodenominan gobernadores regionales.

Se hace urgente la aplicación de políticas de capacitación técnica productiva a los pobladores rurales campesinos, ganaderos e indígenas, un fuerte apoyo de inversión económica para la provisión de agua y prácticas más eficientes y rentables de producción. De continuarse la producción ganadera de manera extensiva y sin manejo técnico, es previsible que los problemas de erosión y desertización de los suelos se agraven, en un escenario ya preocupante por los efectos del cambio climático.

Por su parte, siendo que la producción agrícola a cargo de la población campesina adolece de prácticas de agregación de valor y de formas administrativas de tipo cooperativo, es recomendable fomentar las experiencias de cooperación entre las organizaciones de productores, los municipios y ONG que hayan desarrollado técnicas de producción y transformación de productos.

Creemos que la profundización de proyectos territoriales sectoriales y de poder corporativo (campesinos, indígenas, ganaderos, de élites de la burocracia pública, empresariales), en pugna de poder permanentes y con visiones de predominio sobre otros –bajo la concepción de que sólo la derrota de los otros sectores en el ámbito político permitirá la sobrevivencia del grupo al que está uno adscrito– contribuye a generar escenarios de desconfianza y de prácticas de acción oportunistas y que inciden negativamente en la estructuración de proyectos territoriales inclusivos y sostenibles.

En este sentido, las prácticas de corrupción, generalizadas en los procesos de adjudicación de obras públicas, deben ser combatidas agresivamente. De no hacerlo, la calidad de las obras construidas no puede ser garantizada, ni fiscalizada adecuadamente en caso de que algunos funcionarios estén involucrados en estos actos. La formación y el reconocimiento de principios de conducta ética deberían, por lo tanto, formar parte de las currículas educativas ya que en el presente son todavía decisiones de tipo individual y voluntario. Los sectores sociales enfatizan la defensa de sus derechos pero no asumen responsabilidades por deberes de ciudadanía activa. En el largo plazo, las poblaciones que comparten prácticas de acción con contenidos éticos, fortalecen las relaciones de confianza a nivel interpersonal, interinstitucional e intersectorial, donde la competencia y las luchas de poder permanecen vigentes pero en un escenario no destructivo, sino de competencia con reglas de juego claras y legítimas.

En las poblaciones indígenas de territorios como el chaco tarijeño, las prácticas de gestión administrativa de recursos económicos son recientes y se requiere la formación de recursos humanos propios que puedan aprender las reglas y normativas administrativas y legales. La entrega de recursos económicos a organiza-

ciones indígenas debería estar regulada, bajo criterios normativos que preserven la equidad de género y el desarrollo productivo. Ello facilitará que se reduzcan los casos donde, por falta de seguimiento administrativo, se den divisiones organizativas y luchas internas por acceder a recursos financieros. Ello también ayudaría a que los nuevos grupos directivos que proclaman el buen uso de los recursos, no terminen repitiendo los errores administrativos denunciados anteriormente por ellos mismos.